

**Javier MARTÍNEZ-TORRÓN y María ÁLVAREZ-MANZANEDA ROLDÁN**, *Normas de Derecho eclesiástico*, Editorial Comares, Granada 1994, XIV + 269 págs.

En un interesante artículo que, a la vuelta de los años, sigue siendo actual, Pedro Lombardía destacaba el carácter eminentemente práctico de la Ciencia jurídica y hacía notar que «la teoría debe hacerse en función de la norma (y de sus presupuestos metajurídicos), a partir de ella y para volver sobre ella. Por eso el profesor de Derecho no puede limitarse a explicar una teoría jurídica, sino que debe enseñar a los alumnos el Derecho desde un planteamiento teórico. El profesor debe llevar al alumno de las normas positivas a los esquemas dogmáticos, para después reconducirlos de éstos a las normas y al caso, o lo que es lo mismo, a la aplicación de las normas» (P. LOMBARDÍA, *Sobre la enseñanza universitaria y el método de estudio del Derecho canónico*, en «Revista Española de Derecho Canónico», XII [1957], págs. 168-169).

A partir de estas premisas metodológicas, se comprende que la enseñanza de una disciplina positiva, como el Derecho eclesiástico, deba apoyarse en la cita de los datos normativos. Sin su conocimiento y cabal comprensión por parte de los alumnos, el proceso educativo de la Universidad está condenado al fracaso, porque «no es posible una formación jurídica sin información» (P. LOMBARDÍA, *El Derecho canónico en las Facultades de Derecho*, en «Ius Canonicum», I [1961], pág. 204). Todo ello, sin olvidar que el objetivo primordial de los estudios de Derecho es que los alumnos adquieran una mentalidad jurídica que les haga capaces de manejar

los instrumentos propios de la técnica del Derecho en la consecución de un orden social justo (cfr. *Ibidem*, pág. 202).

Las peculiaridades del Derecho eclesiástico, entre las que se encuentra la dispersión y heterogeneidad de sus normas —difícilmente codificables—, hace que las compilaciones vengan desempeñando una importante función auxiliar en la enseñanza de esta materia, de reciente implantación en la Universidad española. Buena prueba de su necesidad es que, en un período relativamente corto de tiempo, las obras de este género superan la media docena.

En apariencia pueden clasificarse en dos grandes categorías. Una la ocuparía en solitario la *Compilación de Derecho eclesiástico español* (1816-1986), coordinada por José María González del Valle (Madrid 1986), por ser la única que reúne todas las disposiciones específicamente eclesiásticas y nada más que ellas, pero de modo exhaustivo (cfr. la recensión que publiqué en «Ius Canonicum», XXVII [1987], págs. 776-779). En cambio, las demás colecciones de Reina (*Legislación eclesiástica*, Madrid 1983), Bueno (*Legislación eclesiástica del Estado*, Barcelona 1986) Molina y Olmos (*Legislación eclesiástica*, Madrid 1987 y 1994), López Alarcón y Salcedo Hernández (*Legislación eclesiástica del Estado español*, Barcelona 1993) y Contreras Mazario (*Leyes eclesiásticas del Estado*, Pamplona 1994), así como las *Normas de Derecho eclesiástico* de Martínez-Torrón y Álvarez-Manzaneda, tienen en común que sólo pretenden recoger las normas básicas —estatales, acordadas e internacionales— reguladoras del fenómeno religioso en España y algunos textos de otras ramas del Dere-

cho, especialmente conectados con ellas. Cuestión aparte es que no todos los autores entienden lo mismo por norma básica o fundamental y predomina un criterio amplio que, a mi juicio, convierte algunas de estas colecciones en un libro de consulta del profesor y del alumno de Derecho, pero también del jurista en general.

En cualquier caso, tanto aquella como éstas, poseen una indudable finalidad docente. Dicho objetivo preside de un modo particular el repertorio de los profesores Martínez-Torrón y Álvarez-Manzaneda, que me dispongo a comentar, como ellos mismos explican en la interesante *presentación* de su obra. Conciben la consulta directa y el estudio personal de las principales fuentes normativas como el complemento necesario de las clases y del manual. Y esta misma razón sirve para comprender por qué adoptan un criterio restrictivo a la hora de seleccionar las normas de mayor importancia e interés para el estudio del Derecho eclesiástico por parte del alumno, pero lo suficientemente amplio como para incluir algunas disposiciones de otras disciplinas que deben ser tenidas en consideración en virtud de las técnicas de la remisión y del presupuesto o, simplemente, para situar en su contexto las normas eclesiásticas. El criterio selectivo también está presente en las notas a pie de página, breves e incisivas, con las que orientan y clarifican al lector.

Por lo que se refiere a su estructura sistemática, las disposiciones aparecen agrupadas en los siguientes apartados:

I. Normas constitucionales

II. Protección internacional de la libertad religiosa

III. Acuerdos entre el Estado español y la Iglesia católica

IV. Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas minoritarias

V. Ley orgánica de libertad religiosa y normas de desarrollo directo

VI. Asistencia religiosa y ejercicio de la libertad religiosa en centros públicos: a) Militares; b) Penitenciarios; c) Hospitales; d) Centros escolares

VII. Protección penal de la libertad religiosa

VIII. Objeción de conciencia

IX. Normas de Derecho civil español en materia de matrimonio y familia

X. Normas del Código de Derecho canónico

Podemos considerar que el antecedente de la compilación preparada por los dos profesores de la Universidad de Granada, ya mencionados, es la primera de la serie, publicada por Reina en 1984. Se trataba de una colección estricta, con la legislación eclesiástica básica, aunque también incluía, por vía de excepción, normas civiles y canónicas sobre el matrimonio y la familia. En los diez años transcurridos desde entonces ha tenido varias reimpresiones pero ninguna nueva edición, con la consiguiente pérdida paulatina de actualidad, acentuada con la entrada en vigor de los Acuerdos de 1992. Así pues, cuando la necesidad de contar con una obra de estas características puesta al día era ya imperiosa, la aparición de las *Normas de Derecho eclesiástico* de los profesores Martínez-Torrón y Álvarez-Manzaneda, permite afirmar que esta laguna ha quedado cumplidamente colmada.

No obstante, me gustaría realizar un breve comentario de las normas que

incluyen en su repertorio, volviendo sobre algunas ideas que ya expuse cuando analicé con cierto detalle las cuatro primeras colecciones de este género (cfr. *Las compilaciones de legislación eclesiástica del Estado español*, en «Anuario de Derecho eclesiástico del Estado», VII [1991], pp. 607-622).

Sigo pensando que el gran reto de cualquier obra de este género es conciliar los criterios científicos con los docentes. Cuestión de equilibrio, no exenta de dificultades. Por eso conviene cautelarse para no convertirlas en meras acumulaciones de textos, carentes de sistemática, donde las excepciones sean tan numerosas que en lugar de confirmar la regla la destruyan. Es por eso decisivo que el alumno pueda distinguir con claridad aquellas disposiciones que, con independencia de su carácter constitucional, civil, penal, administrativo, etc., pertenecen al Derecho eclesiástico porque consideran el factor religioso en su especificidad, de aquellas otras que en relación a él son Derecho común. Al mismo tiempo, es conveniente explicar al estudiante los motivos docentes que aconsejan llevar a cabo una moderada y selecta repetición de algunas fuentes de cuyos textos completos ya dispone —la Constitución, el Código civil, el Código penal, etc.—, para presentarlos en un volumen de fácil manejo que le permita el seguimiento directo de las explicaciones de clase.

En fin, éstas y otras cuestiones demuestran que la realización de una buena compilación no es cuestión tan sencilla como a primera vista pudiera parecer, por mucho que se trate de un «género chico» dentro de la bibliografía universitaria. Y permite comprender en

su justa medida por qué cuando la selección de normas está realizada con acierto y se explican con claridad los principios que la inspiran, es fácil que los alumnos adviertan con claridad la autonomía científica del Derecho eclesiástico, relativa —como la de cualquier otra disciplina jurídica— y matizada por la unidad del ordenamiento, que se les hará patente a la hora de interpretar y aplicar las normas.

Esto supuesto, y entrando de lleno en la opción sistemática realizada por los profesores Martínez-Torrón y Álvarez-Manzaneda, se comprende que dediquen la primera sección de su repertorio a las *normas constitucionales* (I), de mayor interés para el eclesiasticista. La inclusión íntegra del texto constitucional en una compilación de este género hubiera resultado desmesurada y de difícil justificación, tanto desde el plano científico como desde el docente; pues su importancia como fuente primaria del ordenamiento jurídico español y su exposición por parte de la disciplina del mismo nombre sienta la presunción de que todo estudiante de Derecho dispondrá de una versión completa de ella. Y, aunque en el otro extremo de las hipótesis, los autores podrían haberse limitado a recoger exclusivamente las normas constitucionales que pertenecen en sentido estricto al Derecho eclesiástico, su utilidad hubiera sido más bien escasa y la consulta al texto íntegro obligada.

En cuanto a la *protección internacional de la libertad religiosa* (II), conviene advertir que contiene tanto la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones —cuya inclusión es obligada por ra-

zón de la materia—, como los principales convenios internacionales de derechos humanos. Respecto a estos últimos, cabría haber reproducido tan sólo los preceptos relativos a lo religioso, pero la indudable interconexión de sus normas, unida al interés de conocer el sistema de garantías jurídicas que establecen y a la moderada extensión de estos documentos —de los que quizás los alumnos no dispongan todavía—, garantizan el interés de la opción realizada por los autores.

Las dos secciones siguientes recogen la fuente pacticia más específicamente eclesialista que conoce el Derecho español: los Acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones —*Iglesia católica (III)* y *confesiones religiosas minoritarias (IV)*—. La distinta naturaleza jurídica de unos y otros explican la subdivisión. En primer lugar se insertan los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Iglesia católica, de naturaleza concordataria y rango de tratado internacional. La existencia del Convenio de 1962, de idéntica naturaleza —sobre reconocimiento, a efectos civiles, de estudios de ciencias no eclesiásticas realizados en España en las Universidades de la Iglesia católica—, no resta universalidad a la sección, por ser el más sectorial de todos los textos vigentes estipulados por vía diplomática con la Santa Sede y, sobre todo, porque no pertenece a lo que se ha dado en llamar *el nuevo sistema concordatario español*. En cuanto a los Acuerdos de 1992, firmados entre el Estado y las otras tres confesiones a las que reconoce notorio arraigo, podría considerarse de cara a nuevas ediciones la conveniencia de incluir en nota las respectivas Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, en

cuya virtud aquéllos adquieren fuerza jurídica o, al menos, su disposición final primera.

Bajo el título *Ley orgánica de libertad religiosa y normas de desarrollo directo (V)* se publica la meritada fuente y sendos reales decretos sobre organización y funcionamiento del Registro de entidades religiosas y sobre constitución de la Comisión asesora de libertad religiosa. En cambio, la ausencia de la orden sobre organización y competencia de dicha comisión, está justificada porque no desarrolla la ley orgánica sino la segunda de las disposiciones de rango inferior.

Las tres siguientes secciones reúnen —por este orden— normas sobre *asistencia religiosa y ejercicio de la libertad religiosa en centros públicos (VI)*, *protección penal de la libertad religiosa (VI)* y *objeción de conciencia (VIII)*. En este punto me parece que los autores, dentro de su propósito de reunir únicamente y con criterios más bien restrictivos *las normas de mayor importancia y de mayor interés para el estudio por parte del alumno* (pág. XII), han primado éstas sobre aquéllas. Las disposiciones transcritas afectan a cuestiones puntuales y de detalle —de importancia e interés variables, pero nunca superlativos— y ponen de relieve la ausencia de otras normas sobre materias de similares características cuya inclusión hubiera convertido este repertorio en una compilación extensa. De todos modos, las disposiciones que contienen estas secciones si bien no son en rigor de carácter básico, sí que pertenecen en sentido estricto al Derecho eclesialístico; y esta circunstancia, unida a su relativa amplitud temática, hará que sirvan de apoyo a la explicación de buena parte de la asignatura.

Las dos últimas secciones, tanto la de *normas de Derecho civil español en materia de matrimonio y familia* (IX) como la de *normas del Código de Derecho canónico* (X), puede decirse que constituyen una excepción dentro del planteamiento general de la obra. Con las primeras surge de nuevo el dilema de que el alumno duplique fuentes, a cambio de disponer en una única publicación de reducidas dimensiones de los textos de mayor interés dentro de la disciplina, o se vea obligado a consultar varios volúmenes a la vez. Una cuestión menor es que el rótulo elegido es un tanto equívoco, porque así como reúne los artículos 42 a 107 del Código civil, relativos al matrimonio, del resto de los preceptos sobre la familia tan sólo incluye las normas sobre la adopción, que incluso podrían haberse obviado.

El extracto del Código de Derecho canónico de 1983 con el que termina la compilación lo integran algunos cánones pertenecientes al Libro I —De las normas generales—, todos los que figuran en el Libro IV, Parte I, Título IV —Del matrimonio (cc. 1055-1165)— y todos los del Libro VII, Parte III, Título I —De los procesos matrimoniales (cc. 1671-1707)—. La unidad del Código y la interconexión de sus normas, hace que un buen número de las publicadas no puedan comprenderse y aplicarse sin consultar las demás. No obstante, aunque lo ideal sería que todo jurista —incluido el estudiante de Derecho— contara entre sus instrumentos de trabajo con el Código de Derecho canónico, se impone un sano realismo. En esta línea, conviene advertir que en la mayoría de los casos el alumno se conformará con la consulta de un extracto, lo que siem-

pre será preferible a que posea una ignorancia supina *in re canonica*. Y, en mi opinión, es desde esta perspectiva desde la que pueden conciliarse los criterios científicos con el principio de utilidad adoptado por los autores de esta compilación (pág. XIII).

Firme todo lo anterior, no cabe sino felicitar a los profesores Martínez-Torrón y Álvarez-Manzaneda por el esfuerzo realizado, que permite contar a la comunidad universitaria con una compilación de Derecho eclesiástico de carácter básico, actualizada y convenientemente ilustrada con anotaciones a pie de página, en un momento en el que se echaba en falta un texto de esta naturaleza. Finalmente, en cuanto a los aspectos formales, es de alabar el buen gusto y la pulcritud de la edición. No dudo de que gozará de la aceptación de profesores y alumnos. Confío también que las observaciones y sugerencias, propiciadas por la publicación y potenciadas de modo particular por las buenas disposiciones que muestran los autores a recibirlas, les ayuden en la preparación de nuevas ediciones. Por mi parte, no añadiré ninguna más en este momento, salvo que consideren la conveniencia de incluir un índice de materias para facilitar la consulta de los textos.

JAVIER FERRER ORTIZ

J. PRADER, *La legislazione matrimoniale latina e orientale. Problemi interecclesiali interconfessionali e interreligiosi*, Rome, Edizioni Dehoniane 1993, 105 pp.

Siendo el Derecho canónico uno, es necesario que los canonistas y todos